

XVIII Congreso Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración
Universidad de Granada, 9-11 Septiembre 2026

GT 5.5 Esquemas Innovadores de Gobernanza Ambiental frente a las Emergencia Climática:
Discursos, Actores y Políticas Públicas

Transición energética y conflictos locales: un análisis comparado de casos de estudio en Italia y España

Simone Guglielmelli. Doctorando – Universidad de Calabria (Italia).

Resumen

La crisis socioecológica se entrelaza con el estado de policrisis que caracteriza a las sociedades contemporáneas, agravándolo profundamente. En este contexto, las instituciones internacionales y europeas han identificado la descarbonización como un desafío central, promoviendo estrategias como el European Green Deal y los paquetes legislativos posteriores. La transición energética hacia tecnologías renovables representa, por tanto, un pilar fundamental de estas políticas. Entre ellas, la energía eólica desempeña un papel destacado, también debido a las importantes inversiones previstas a nivel europeo. España e Italia se encuentran entre los países más afectados por este proceso.

Sin embargo, la expansión y construcción de parques eólicos genera con frecuencia conflictos a nivel local, creando tensiones entre distintos intereses y actores, como demuestra la literatura. Este paper ofrece un análisis comparado de dos regiones particularmente afectadas por estas dinámicas: Calabria en Italia, y Aragón en España. El objetivo es examinar las políticas de transición energética en su fase de implementación, identificando las principales fuentes de conflicto, los actores implicados y sus discursos, así como las prácticas de gobernanza que emergen en distintos contextos territoriales.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo adopta un enfoque comparativo cualitativo basado en el análisis de contenido de documentos (incluidos planes energéticos, actos administrativos, declaraciones de comités y asociaciones, y cobertura mediática), así como en entrevistas semiestructuradas con actores políticos, sociales y económicos.

Introducción

El debate sobre la transición energética se sitúa hoy en un contexto marcado por crisis múltiples e interconectadas, en el que emergen con fuerza la dimensión de la crisis ecológica y sus repercusiones socioeconómicas y políticas. Lejos de ser un fenómeno puramente tecnológico, la transición energética está profundamente entrelazada con relaciones de poder, estructuras económicas y formas de organización social. Las tecnologías energéticas no son, en efecto, neutrales: incorporan intereses, visiones del mundo y configuraciones específicas de poder. En este sentido, la difusión de las fuentes renovables implica una reconfiguración de los sistemas sociotécnicos y de las relaciones entre territorios, dando lugar a nuevos conflictos. En particular, la fase de implementación de las políticas públicas representa uno de los ámbitos más críticos del proceso de transición.

Los conflictos locales vinculados a la realización de nuevas infraestructuras tecnológicas, especialmente en el caso de los parques eólicos, constituyen hoy una de las principales arenas de movilización política y social. Lejos de ser reducibles a formas de oposición localista o Nimby, dichas movilizaciones plantean cuestiones más amplias de justicia distributiva, procedimental y ecológica, interrogando las modalidades con las que se distribuyen los costes

y beneficios de la transición entre actores y territorios. Tanto en el caso italiano como en el español, la literatura ha analizado ampliamente el desarrollo de las energías renovables en relación con los instrumentos de política pública y los objetivos de descarbonización. Resulta, en cambio, menos explorada la dimensión territorial de los conflictos vinculados a su implementación, en particular en relación con las diferencias entre contextos regionales y los modelos de desarrollo local que dichos conflictos ponen en discusión.

Este trabajo se inserta en esta perspectiva, proponiendo un análisis de dos contextos locales, en Italia y en España: Calabria y Aragón. Italia y España son dos países del sur de Europa que comparten algunas características estructurales, como el creciente despoblamiento de áreas marginales respecto a sus respectivos centros productivos, la exposición a la Gran Recesión estallada en 2008, la ausencia de un partido verde de cuestión única (single issue), una posición geográfica considerada estratégica que los sitúa en el centro de los planes europeos de transición energética, y una distribución desigual en el territorio de las inversiones en energías renovables. Al mismo tiempo, ambos países presentan diferencias relevantes en cuanto a mix energético, fuentes de aprovisionamiento externas, política exterior y relaciones internacionales, además de en las modalidades de implementación de las políticas europeas.

Dentro de este marco, la atención se centrará en dos contextos regionales, entre los principales de cada país en producción de energía eólica, ambos afectados por una creciente presión vinculada al desarrollo de nuevos proyectos a gran escala y por conflictos locales relacionados con su realización. El estudio indaga en particular cómo dichos conflictos reflejan tensiones más amplias relativas a los modelos de desarrollo territorial y a la gobernanza de la transición energética, no simplemente como un desafío ambiental, sino como una arena política y simbólica en la que se redefinen relaciones de poder e instancias de justicia.

El artículo está organizado de la siguiente manera: las dos primeras secciones enmarcan la transición energética como un proceso político multidimensional y multinivel; la tercera analiza los conflictos locales vinculados a las fuentes renovables; la cuarta reconstruye el contexto energético italiano y español; la quinta presenta el diseño de la investigación y los casos de estudio; las secciones sucesivas discuten los resultados empíricos y la comparación entre Calabria y Aragón, sobre la base del análisis de las estrategias de gobernanza y de los discursos de los actores.

1. La transición energética como cuestión política

El contexto político y social actual está marcado por una condición de policrisis - desde la recesión de 2008, pasando por la pandemia, hasta la guerra ruso-ucraniana y la de Oriente Medio - que se entrelaza con la crisis climática, definida como uno de los principales desafíos sistémicos de nuestro tiempo. Esta es el resultado de siglos de explotación intensiva de recursos naturales finitos y concentrados en áreas geográficas específicas. La transición energética, entendida como el paso de fuentes fósiles a fuentes renovables, constituye un pilar esencial de la transición ecológica más amplia y un instrumento imprescindible para la mitigación del cambio climático. El nexo energía-clima está ampliamente reconocido en la literatura, tanto en el ámbito de las llamadas ciencias STEM como en el de las ciencias sociales. Remite a la relación inextricable entre los sistemas energéticos globales y el sistema climático, en la que las transformaciones de uno inciden profundamente en el otro. Como señala Sovacool (2011), el nexo energía-clima representa un espacio político y analítico que requiere soluciones integradas capaces de conjugar seguridad energética, mitigación del cambio climático y desarrollo sostenible. La organización del sector energético puede alimentar desigualdades o promover equidad, creando ganadores y perdedores dentro de nuestras sociedades (Sovacool y Van de Graaf 2020). Implica decisiones políticas que definen el modelo de sociedad en el que

queremos vivir. No es casualidad que las transiciones energéticas hayan representado siempre puntos de inflexión históricos fundamentales, en la base de transformaciones políticas, sociales y económicas a escala global.

La principal discontinuidad entre las transiciones energéticas del pasado y la actual reside en dos elementos fundamentales: la concentración geográfica y el carácter finito de los recursos (Geels 2014, Sovacool 2016, Smil 2017). Al igual que en el pasado, las transiciones energéticas no pueden leerse solo como el fruto de innovaciones tecnológicas: representan el resultado de dinámicas económicas, sociales y geopolíticas complejas que moldean las sociedades y los modelos de desarrollo en los que se basan (Mitchell 2011, Malm 2016). Las decisiones sobre qué tecnologías de producción de energía adoptar no dependen únicamente de la eficiencia técnica o de la relación coste-beneficio, sino que están fuertemente influenciadas por la legislación, los incentivos o desincentivos estatales, los eventos focalizadores y la estructura de la gobernanza (Hughes 1983, Prontera 2008). En el análisis de la transición, los regímenes energéticos se conceptualizan como sistemas sociotécnicos, es decir, conjuntos integrados de actores, instituciones, artefactos tecnológicos, saberes y elementos materiales e inmateriales interconectados. Este enfoque supera la idea de una tecnología neutra y autónoma respecto a las relaciones sociales, evidenciando en cambio su politicidad intrínseca y su carácter social. Las tecnologías energéticas incorporan valores, visiones del mundo e intereses específicos (Magnani 2021; Prontera 2013), y por ello la transición no puede entenderse como una mera sustitución de tecnologías, sino como un proceso de transformación profunda de los marcos políticos, económicos, culturales e institucionales.

2. La transición energética como fenómeno multidimensional y multinivel

La cuestión energética representa un fenómeno político y social intrínsecamente complejo, cuyo análisis requiere un enfoque integrado y sistémico. Dicha complejidad deriva, en particular, de dos características principales: la multidimensionalidad y el carácter multinivel de las dinámicas que la atraviesan.

2.1 El carácter multidimensional

Para comprender plenamente la complejidad de la cuestión energética es necesario adoptar una perspectiva multidimensional que tenga en cuenta al menos cuatro aspectos interdependientes: las dimensiones internacional, estratégica, de la incertidumbre y cognitiva (Sovacool 2013; Smil 2010; Prontera 2008).

Dimensión internacional y de política exterior

La cuestión energética y las relaciones entre Estados son profundamente interdependientes, en particular en lo que respecta a las fuentes fósiles, que han sostenido el desarrollo económico global hasta hoy. La concentración geográfica de dichos recursos determina la centralidad de las relaciones políticas entre países exportadores e importadores. Para los Estados industrializados, una de las principales preocupaciones es asegurar relaciones estables y duraderas con los proveedores de recursos energéticos. Episodios como el shock petrolero de los años setenta o, más recientemente, la guerra ruso-ucraniana, muestran hasta qué punto las crisis energéticas están estrechamente vinculadas a las dinámicas geopolíticas y a los equilibrios internacionales. No sorprende, en este sentido, que en los meses posteriores a la invasión de Ucrania los directivos de las grandes empresas energéticas participadas por el Estado italiano hayan asumido un papel central en la definición de las relaciones internacionales, abriendo nuevos canales de aprovisionamiento con otros países productores (Prontera y Lizzi 2023). Históricamente, la estrecha conexión entre política energética y política exterior ha dificultado trazar una línea de separación clara entre ambos ámbitos. Ya

desde el siglo pasado, las políticas exteriores de muchos países incluían cuestiones vinculadas a la energía, mientras que las políticas energéticas se desarrollaban con instrumentos y objetivos propios de la diplomacia internacional. La primera fase de la política energética se fundaba esencialmente en una lógica petrolera y de poder, que veía la competencia entre distintas naciones (Frankel 1970; Adelman 1972; Grayson 1981; Feigenbaum 1985). Aún hoy, mantener relaciones sólidas con los principales países exportadores de fuentes fósiles sigue siendo una prioridad estratégica para la seguridad de los aprovisionamientos.

Dimensión estratégica

La dimensión estratégica de la energía se basa en el hecho de que la política energética representa una condición sine qua non para la consecución de objetivos fundamentales en numerosos otros sectores, desde el transporte hasta la industria, pasando por el medio ambiente (Kalicki y Goldwin 2005). Esta condición estratégica implica, por un lado, que los gobiernos tiendan a mantener el control del sector, evitando delegar competencias a instituciones supranacionales, y, por otro, que la relación Estado-mercado se mantenga estrecha. Aunque el sector energético ha conocido un proceso de liberalización desde los años noventa, la relevancia estratégica del recurso hace que el sector público siga ejerciendo un papel intervencionista, sirviéndose de los grandes actores nacionales como instrumentos de política pública (Prontera 2008).

Dimensión de la incertidumbre

La incertidumbre representa una constante del sector energético, generada por múltiples factores: la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales, la evolución tecnológica, las dinámicas de las relaciones internacionales entre productores e importadores, y las modalidades de implementación de las políticas a nivel territorial. La combinación de estos elementos convierte la planificación energética en un campo sujeto a continuos cambios y tensiones, en el que la previsión es siempre parcial.

Dimensión cognitiva

La dimensión cognitiva remite a los modos en que los actores sociales e institucionales interpretan la naturaleza de los problemas energéticos, influyendo así en la definición de las prioridades políticas y en las decisiones de política pública. La misma realidad energética puede enmarcarse privilegiando el aspecto económico (como coste y factor de competitividad), político (como cuestión de seguridad nacional) o socioambiental (como causa del cambio climático y de las desigualdades). Estas diferentes percepciones determinan no solo la construcción del problema, sino también la identificación de las soluciones consideradas legítimas y prioritarias. Con el tiempo, la evolución del debate muestra cómo la centralidad de los temas económicos y de seguridad, predominante hasta los años ochenta, ha sido progresivamente acompañada, y en parte sustituida, por una atención creciente a las cuestiones ecológicas.

2.2 El carácter multinivel

Uno de los elementos que contribuyen a definir la transición energética como un fenómeno político complejo es su carácter multinivel. El concepto, desarrollado en los estudios sobre la gobernanza europea e internacional, describe estructuras en las que la autoridad se distribuye en múltiples niveles y la acción política se realiza a través de acuerdos, negociaciones y formas de coordinación o competencia (Pierre y Peters 2000; Hooghe y Marks 2005; Benz et al. 2007). La transición energética, en efecto, se sitúa en un contexto en el que decisiones y estrategias se entrelazan entre niveles transnacionales, nacionales y locales (Sovacool 2011, Prontera 2023,

Campolongo et al. 2026). Analizar la transición energética significa, por tanto, indagar también en qué espacios institucionales y en qué niveles de gobierno esta toma forma. En este marco emergen conflictos verticales, entre la Unión Europea, los Estados y los niveles subnacionales, y tensiones horizontales, entre Estados miembros o entre regiones de un mismo país, que alimentan divergencias en los objetivos y en los instrumentos de política pública. Comprender la gobernanza de la transición energética significa, por tanto, analizar las interacciones entre políticas nacionales, internacionales y locales, que pueden complementarse, reforzarse o contradecirse, con instrumentos y objetivos a menudo contrapuestos, generando conflictos. Lo que determina el éxito o el fracaso de la transición es la implementación de las políticas a nivel local. Esta fase no representa un paso automático o dado por sentado, ni un simple trámite posterior a las decisiones adoptadas a nivel internacional y nacional. La implementación de estas medidas ha resultado compleja por dos motivos. Por un lado, los acuerdos fijan objetivos genéricos, mientras que las decisiones concretas sobre cómo alcanzarlos dependen de negociaciones entre configuraciones variables de actores nacionales y locales (Citroni 2024). Por otro lado, el contexto internacional ha cambiado radicalmente, marcado por crisis recurrentes y cambios rápidos. Las crisis energética y del coste de la vida, originadas por las interrupciones postpandemia de COVID-19 en las cadenas de suministro y agravadas por la guerra en Ucrania, han producido suspensiones de los suministros, subidas de los precios de las materias primas y crecientes temores respecto a los costes de las transiciones climática y energética (Bocquillon 2024).

3. Las oposiciones a nivel local

La transición energética, como fenómeno político complejo, da lugar a múltiples desafíos, problemas y conflictos. Se configura como una *positional issue* (Campolongo et al. 2024; 2025; Biancalana y Ladini 2023), que abre paso a diferentes marcos cognitivos y a distintas soluciones posibles, generando competitividad y polarización entre los actores políticos y sociales. El eje de las políticas de transición energética, y más en general de todas las políticas orientadas a contrarrestar el cambio climático, es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la descarbonización y la consiguiente inversión en tecnologías capaces de producir energía a partir de fuentes renovables: sol, viento, agua. Tanto en Italia como en España, el principal desafío se refiere a los conflictos locales sobre las modalidades de realización de las nuevas instalaciones de fuentes renovables (Eichenauer y Gailing 2022). La introducción de las FER, como toda tecnología, requiere en efecto la alineación de tres ámbitos: económico, regulador y social, este último vinculado a la aceptación pública de los proyectos (Deuten et al. 1997; Geels y Verhees 2011). Una parte de la literatura, sobre todo en el pasado, ha interpretado las protestas como expresiones Nimby, localistas o debidas a una escasa concienciación sobre los beneficios de las renovables (Aitken 2010). Sin embargo, crece un enfoque crítico hacia esta lectura, acusada de deslegitimar las razones de la protesta y de excluir las críticas planteadas por las movilizaciones (Magnani 2021; Rand y Hoen 2017). Numerosos estudios subrayan así la importancia de leer estos conflictos a la luz de las demandas de justicia distributiva, procedimental, ecológica y de reconocimiento, insertando las FER en procesos decisionales abiertos, inclusivos y democráticos (Wolsink 2007). Otros autores (Ellis 2007; Barry et al. 2008; Aitken 2010) señalan, sin embargo, que la búsqueda de aceptación pública parte del supuesto de que las FER son intrínsecamente positivas y ampliamente reconocidas, relegando las protestas a minorías y reduciendo la participación a un instrumento funcional al éxito de los proyectos, dentro de una lógica de "positivismo imprudente" (Ellis et al. 2007, 536). En contraposición, Aitken (2010) invita a contextualizar más a fondo las movilizaciones, analizando sus razones en los distintos contextos sociales y territoriales. En este sentido, los conflictos en torno a las infraestructuras energéticas no son un fenómeno nuevo, pero adquieren hoy una centralidad inédita en la transición energética. Las

infraestructuras low-carbon y las FER no son tecnologías neutrales, sino que producen asimetrías socioecológicas. Hornborg (2019) sostiene que estas se basan en flujos desiguales de recursos —materiales, tierra, agua— localizados a menudo en las periferias. Esto resulta evidente en los procesos de extracción y acaparamiento de tierras (land grabbing) en el Sur global (Voskoboynik y Andreucci 2021), pero también en los conflictos distributivos y procedimentales en las periferias del Norte y del Sur (Dunlap 2024). La producción renovable requiere amplios espacios marginales, caracterizados por costes bajos y relaciones de poder desequilibradas, que dejan a las comunidades locales con escaso poder de negociación (Lipari 2020; Scotti 2020). De este modo, la transición corre el riesgo de trasladar los costes a los territorios más frágiles, transformándose en una oportunidad de acumulación para las grandes corporaciones, a menudo respaldada por procesos decisionales solo formalmente compartidos (Lipari 2021; Pellizzoni et al. 2022). Como observan Sánchez-Contreras et al. (2023), la transición, si se deja únicamente en manos del mercado y de sus lógicas, corre el riesgo, tras la retórica de la sostenibilidad, de dar lugar a nuevas desigualdades o incluso a lógicas neoextractivistas.

4. El contexto energético italiano y español

El mix energético italiano sigue dependiendo en gran medida de las importaciones, sobre todo de petróleo y gas natural procedentes de Rusia, el Norte de África y Oriente Medio. En 2023, el gas representó el 38,4% del aprovisionamiento, el petróleo el 37% y el carbón solo el 3,7% (PNIEC 2024). La producción interna está dominada por la bioenergía y los residuos, las renovables no combustibles, el petróleo crudo y la energía hidroeléctrica. Entre 2000 y 2023 se ha reducido la cuota del gas, mientras que la bioenergía y los residuos han aumentado, confirmando un lento reequilibrio del mix. En 2023, el mix eléctrico italiano estuvo dominado por el gas natural, que cubrió aproximadamente la mitad de la producción, seguido por la energía hidroeléctrica y la fotovoltaica. Una contribución significativa provino también de la eólica, con un 9%. Residuales pero todavía presentes las fuentes fósiles tradicionales, el carbón representa aún el 5% (IEA 2023). En conjunto, aunque el gas natural sigue siendo la fuente predominante, las renovables - hidroeléctrica, solar y eólica - están asumiendo progresivamente un papel cada vez más relevante, contribuyendo a más de un tercio de la generación eléctrica nacional. Las renovables cubren ya más de un tercio de la generación, gracias sobre todo a la fotovoltaica incentivada por el Conto Energia (Alpino et al. 2025). Esta estructura refleja la escasez de recursos fósiles internos, lo que convierte a Italia en un país importador y vulnerable a las crisis geopolíticas. La crisis del petróleo de 1973, la renuncia al gas ruso tras la invasión de Ucrania y las relaciones con el Norte de África (Prontera y Lizzi 2023; Siddi 2022), así como la reciente agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, con el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz, paso clave para la importación de petróleo, han puesto de manifiesto la fragilidad del modelo italiano. Italia sigue siendo uno de los principales emisores de CO₂ de Europa, herencia de un sistema industrial que durante mucho tiempo la situó como "refinería de Europa". Dos actores nacionales han desempeñado un papel crucial: ENEL, hoy también protagonista de la transición, y ENI, que sigue siendo central como compañía petrolera y gasística. Ambas han consolidado una trayectoria fósil, obstaculizando durante años la reconfiguración del sector (Di Nucci 2007; Prontera 2008). Desde el punto de vista de la distribución territorial de las tecnologías energéticas renovables, la eólica se concentra en el Sur, mientras que la fotovoltaica está más extendida entre el Centro-Norte y algunas zonas del Sur. Las nuevas instalaciones han crecido rápidamente desde 2022, con 5,2 GW fotovoltaicos añadidos en 2023, más del 70% en el Centro-Norte (Terna 2023). Sin embargo, la expansión encuentra límites infraestructurales: el transporte de la energía desde los lugares de producción hasta los de consumo requiere el refuerzo de las redes y de los sistemas de almacenamiento (Alpino et al. 2025).

Un panorama en cierto modo análogo, y en otros distinto, emerge en el caso español. España se encuentra entre los países europeos más vulnerables a los impactos climáticos: en 2020 la temperatura media ya era superior en 1,7 °C a los niveles preindustriales, con una aceleración marcada desde los años ochenta, mientras que las olas de calor, la sequía y los vientos extremos han multiplicado el riesgo de incendios (AEMET 2021; Greenpeace 2020). Desde el punto de vista energético, España ha sido durante mucho tiempo una especie de "isla energética": los Pirineos limitan las conexiones con la Europa continental y solo dos cables submarinos la conectan con Marruecos (REE 2018), aunque se beneficia de una notable diversificación de fuentes y proveedores (Campos-Martín et al. 2022). El petróleo sigue siendo la fuente primaria (42,6%), seguido del gas natural (22,5%), la energía nuclear (13,2%) y las renovables no hidroeléctricas (9,8%). En el plano eléctrico, en cambio, los avances son más marcados: en 2024 las renovables cubrieron el 56,8% de la producción, con la eólica como primera fuente (23,2%), seguida de la nuclear (20%) y la fotovoltaica (17%) (REE 2024). La generación eólica se concentra especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón. La energía nuclear, aunque estable en el 20%, tiene previsto un cierre progresivo (phase-out) para 2035. En cuanto a la gobernanza, el sistema energético-climático español se basa en tratados internacionales, la legislación de la UE, la Constitución y los Estatutos de las Comunidades Autónomas, con una distribución de competencias no siempre clara que genera conflictos y fragmentación institucional (Galera Rodrigo et al. 2023): si bien algunas materias siguen siendo competencia exclusiva del Estado (mercado, aprovisionamiento, redes), las Comunidades Autónomas disponen de márgenes de adaptación y gestión, en particular en los procesos de autorización de las grandes instalaciones renovables, donde las tensiones multinivel entre las CCAA y las comunidades locales se hacen más evidentes.

Al igual que en el caso italiano, también el proceso de transición energética español puede leerse a través de fases análogas: liberalización del mercado, expansión incentivada de las renovables a principios de los años 2000, ralentización tras la crisis de 2008-2011, relanzamiento a partir de 2019 con el Pacto Verde europeo, confirmando una trayectoria compartida a nivel europeo, aunque con especificidades nacionales en los tiempos y las modalidades de implementación.

5. Metodología y preguntas de investigación

Sobre la base de estas premisas, nuestra investigación se centra en los conflictos que emergen en la fase de implementación de las políticas de transición energética, con especial referencia a la realización de instalaciones eólicas en dos contextos regionales específicos, Calabria y Aragón. Aunque con ubicaciones geográficas, institucionales y socioeconómicas diferentes, ambos territorios están afectados por una presión creciente vinculada al desarrollo de grandes proyectos eólicos, por una planificación energética ordinaria bloqueada durante mucho tiempo, y por el recurso a instrumentos extraordinarios para autorizar nuevas infraestructuras de alto consumo energético - la planta de regasificación de Gioia Tauro en Calabria, los centros de datos en Aragón- que redefinen la propia función de la eólica regional.

Ambos contextos son periféricos respecto a sus respectivos centros económicos nacionales, están caracterizados por un despoblamiento persistente - que en Aragón adquiere la dimensión reconocida de la España vaciada - y se sitúan entre las regiones con mayor concentración de inversiones eólicas en los dos países. Aragón es la segunda comunidad autónoma española por potencia instalada y la primera por crecimiento en 2025 (REE 2025); Calabria se encuentra entre las primeras regiones italianas por potencia eólica instalada, en un contexto - el sur de Italia y las islas - que por sí solo concentra más del 90% de la eólica nacional (Alpino et al.

2025). En ambos casos, a la elevada presión de las inversiones se acompañan conflictos territoriales generalizados en torno a la realización de nuevas instalaciones. A ello se suman las afinidades históricas e institucionales entre Italia y España, dos economías duramente golpeadas por la crisis de la deuda soberana y por la Gran Recesión de 2011, y estigmatizadas en el debate público europeo como periféricas respecto al núcleo motor de la eurozona. Precisamente la transición energética representa hoy, para estos mismos países y en particular para sus áreas interiores, despobladas y meridionales, un terreno en el que aquella marginalidad histórica se convierte en una nueva centralidad: territorios que en su día estuvieron al margen del desarrollo industrial europeo se convierten hoy en nodos estratégicos de la producción energética y, en el caso aragonés, de la infraestructura digital.

Nuestra investigación se basa en el análisis de una pluralidad de materiales. En primer lugar, con el objetivo de profundizar en los contextos regionales, realizamos dos entrevistas exploratorias con periodistas de la prensa local, uno por caso de estudio, con una larga experiencia en temas de energía y medio ambiente. A esto siguió el análisis de los planes regionales de energía y clima de las dos regiones, de los documentos producidos por organizaciones políticas y sociales, y la realización de diecisiete entrevistas semiestructuradas, dirigidas a actores políticos, sociales y económicos activos en los dos contextos regionales. Para el caso aragonés, los entrevistados incluyen a dos alcaldes, un diputado regional y responsable del sector energía del partido de extrema derecha VOX, un representante regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la directora del sector energía y minas del gobierno regional y dirigente del Partido Popular (PP), el fundador y dirigente de la fuerza política Aragón Existe, el portavoz del nodo aragonés de la organización ecologista Ecologistas en Acción y el portavoz del movimiento ambientalista Plataforma por la Defensa del Paisaje de Teruel. Para el caso calabrés, los entrevistados incluyen a dos alcaldes, un concejal del municipio capital de la región, un consejero regional de la oposición del Partido Democrático, un representante de Legacoop Agroalimentare, un representante de la multinacional energética alemana RWE, los portavoces de la coordinadora Controvento Calabria y de Italia Nostra Calabria, y la presidenta regional de Legambiente.

La selección de los actores a entrevistar fue precedida por un análisis del debate público sobre el tema, realizado a través de artículos de prensa identificados mediante búsqueda por palabras clave en los principales periódicos online regionales, *Heraldo de Aragón* y *El Periódico de Aragón* para el caso español, *Corriere della Calabria* y *LaC News24* para el caso italiano. El período considerado va desde octubre de 2021, con la aprobación definitiva del Pacto Verde Europeo por parte del Parlamento Europeo, hasta la primavera de 2026. Dicho período coincide, para el caso aragonés, con el gobierno del socialista Lambán (2015-2023) y con el del popular Azcón desde 2023, sostenido por dos mayorías distintas, la segunda de las cuales incluye también a VOX. Para el caso calabrés, el período coincide con los dos mandatos de Roberto Occhiuto, vicesecretario nacional del partido Forza Italia, sostenido por una mayoría de centroderecha y reelegido en otoño de 2025.

El estudio se articula en torno a algunas preguntas de investigación principales: ¿cómo interpretan y representan los actores locales los proyectos eólicos? ¿Qué intereses, alianzas y líneas de conflicto emergen en los dos contextos? ¿En qué medida las movilizaciones reflejan visiones más amplias de desarrollo territorial y de futuro energético, yendo más allá de la oposición a infraestructuras concretas? ¿En qué medida los conflictos a nivel local están conectados con las demandas de justicia procedimental y distributiva? ¿Qué papel asume la eólica en las estrategias de desarrollo regional definidas por la gobernanza de la transición energética en los dos contextos?

La hipótesis preliminar es que los conflictos locales expresan tensiones más profundas vinculadas a los modelos de desarrollo y a la gobernanza de la transición energética, y que esta última no representa solo un desafío ambiental, sino también una arena política y simbólica en la que se redefinen relaciones de poder y principios de justicia.

6. La gobernanza de la transición energética de las regiones de Calabria y Aragón

En ambos contextos regionales, el crecimiento de las inversiones energéticas choca con una planificación ordinaria estructuralmente paralizada. En Calabria, el actual Plan Energético Ambiental Regional (PEAR) data de 2005; el proceso de actualización, iniciado en 2009, atraviesa una vicisitud larga y accidentada, detenida, retomada en 2015, relanzada en 2020, hasta confluir en 2022 en el nuevo Plan Regional Integrado de Energía y Clima (PRIEC), todavía hoy en fase de Evaluación Ambiental Estratégica y no aprobado de forma definitiva, casi veinte años después del vencimiento natural del instrumento que debería sustituir.

En Aragón, la planificación energética autonómica sigue detenida en el Plan Energético 2013-2020, nacido en un contexto de austeridad ya superado: un intento de actualización iniciado en la legislatura de Azcón (PLEAR 2024-2030) queda interrumpido por la ruptura de la coalición PP-Vox en julio de 2024, que priva al gobierno de los votos necesarios para llevarlo al Parlamento. Los determinantes institucionales de este retraso, sin embargo, siguen caminos distintos en los dos casos. En Aragón, la inestabilidad de las coaliciones de gobierno representa una variable que ha contribuido al bloqueo: el crecimiento exponencial de las autorizaciones bajo el gobierno socialista de Lambán (2015-2023) se produce en un contexto de desregulación de facto, sin actualización normativa; el posterior gobierno PP-Vox de Azcón, sin mayoría tras la ruptura de 2024, llega incluso a la disolución anticipada del Parlamento autonómico en diciembre de 2025, las primeras elecciones anticipadas en la historia de la Comunidad Autónoma, un desenlace en el que la incapacidad de gobierno ha afectado, junto con las cuentas públicas, también a la planificación energética.

En Calabria, el retraso adopta más bien la forma de un estancamiento procedimental prolongado durante casi dos décadas y varias administraciones, antes de confluir en el actual PRIEC del gobierno de centroderecha encabezado por Roberto Occhiuto. En ambos casos, el vacío de la planificación ordinaria no ha impedido el crecimiento del sector eólico, sino que más bien ha habilitado un desarrollo escasamente regulado. En Calabria, el vacío normativo previo a 2005 —la región no había aprobado las directrices regionales antes de esa fecha— dejó un amplio margen a las decisiones discrecionales de las administraciones locales, favoreciendo, en la primera oleada de inversiones (2000-2012), la aparición de intereses criminales en las inversiones eólicas (Caneppele et al. 2013). En Aragón, el resultado litigioso de los concursos públicos de 2010 generó una normativa de urgencia que se convirtió de facto en la principal referencia operativa para la autorización de las nuevas instalaciones, esquema luego repetido con una disposición de urgencia posterior, anulada por el Tribunal Constitucional, y finalmente con la Ley 5/2024. La gobernanza energética aragonesa se ha estructurado, en las dos décadas posteriores al PLEAR, mediante intervenciones puntuales y de urgencia más que mediante la actualización del instrumento general. Es precisamente dentro de este espacio regulado por vía extraordinaria donde ambas regiones definen una nueva vocación de "hub" para la energía renovable, aunque con un grado de formalización institucional diferente. Los objetivos estratégicos del PRIEC, definidos por el gobierno regional encabezado por Roberto Occhiuto, se insertan en un marco multinivel que remite a las principales referencias nacionales en la materia, el PNIEC, el Plan para la Transición Ecológica y el PNRR, que ha destinado recursos significativos a la llamada "Revolución verde", y se articulan en varias líneas de intervención: refuerzo de las capacidades administrativas y promoción de una cultura del ahorro energético; mejora de la eficiencia del patrimonio

inmobiliario público y reducción de los consumos industriales; identificación de áreas idóneas y desarrollo de la generación distribuida; apoyo a las Comunidades Energéticas Renovables para el autoconsumo colectivo y la lucha contra la pobreza energética; una "Hydrogen Valley" en áreas industriales en desuso; movilidad sostenible y redes inteligentes. Entre estas líneas, la planta de regasificación de Gioia Tauro se inserta en una estrategia más amplia de seguridad energética y de desarrollo de un hub logístico para el GNL en el Mediterráneo, que coexiste dentro del mismo marco programático con los objetivos de descarbonización.

En Aragón, el vínculo entre producción eólica y centros de datos se declara de forma explícita. El Plan de Interés General de Aragón (PIGA), empleado históricamente para los principales asentamientos industriales de la región, se utiliza desde 2019 de manera sistemática para autorizar los centros de datos, desde la entrada de Amazon Web Services en 2020, primera gran inversión del sector en la región, hasta los anuncios de otras importantes empresas del sector digital y energético. El caso más explícito es el acuerdo relativo al proyecto "Búfalo", que declara tres nuevos centros de datos como "proyecto prioritario con generación renovable asociada", no un complemento accesorio, sino tres instalaciones concebidas desde su origen como integradas en una generación eólica y fotovoltaica dedicada, en un único complejo de producción y consumo. Es aquí donde la gobernanza regional hace explícita por vía administrativa, por primera vez de manera formal, la funcionalización de la eólica al desarrollo de los centros de datos: el desarrollo de las renovables y el de la infraestructura digital ya no se tratan como sectores distintos, sino que se autorizan como una única infraestructura integrada.

En el caso calabrés, emerge una evidente contradicción respecto a los objetivos de descarbonización: la ambición del gobierno regional es transformar el puerto de Gioia Tauro en uno de los mayores hubs energéticos del Mediterráneo, lo que se conecta estrechamente con el desarrollo de infraestructuras para la regasificación del gas natural licuado, una fuente fósil. En este sentido, de manera análoga a lo que se observa a nivel nacional también en el Plan Mattei para África, las inversiones en energías renovables avanzan en paralelo a las del sector del gas, evidenciando la coexistencia de trayectorias energéticas diferentes y contradictorias dentro de las estrategias de transición energética.

7. Las coaliciones discursivas

Los actores implicados en la arena de política pública relativa a la producción de energía eólica en Calabria y Aragón son numerosos y heterogéneos, y pueden agruparse en tres ámbitos principales: político, social y económico. En el primero se incluyen representantes de partidos, alcaldes y administradores regionales; en el segundo, organizaciones ambientalistas, comités, coordinadoras de comités y activistas individuales; en el tercero, en cambio, empresas energéticas, asociaciones empresariales y cooperativas. Los actores pertenecientes a cada ámbito comparten posiciones y promueven campañas comunes, pero también expresan visiones divergentes que dan lugar a conflictos, en ocasiones también públicos, como surge tanto de las entrevistas realizadas como del debate mediático. En conjunto, una distinción rígida entre "frente del sí" y "frente del no" respecto a la realización de instalaciones eólicas resultaría forzada. Resulta más útil, en cambio, identificar la presencia de dos coaliciones principales, ambas transversales a los tres ámbitos considerados.

La primera, que definimos Eólica necesaria y urgente, reúne a actores que consideran la tecnología eólica fundamental para responder a la crisis climática y para el desarrollo económico del territorio, y que sostienen la necesidad de una implementación rápida y urgente, aunque no coincida perfectamente con su propio modelo ideal. La segunda, que llamamos Eólica sí, pero no así, comparte en general la necesidad de la transición energética, pero expresa

reservas respecto al desarrollo de la eólica, oponiéndose a ella o subordinándola a condiciones estrictas. Ambas coaliciones son internamente heterogéneas: los actores que las integran comparten solo algunos temas, rara vez mantienen alianzas estructuradas y, en muchos casos, sostienen posiciones que se solapan parcialmente con las de la coalición alternativa. No se registra, por tanto, una elevada uniformidad interna, sino una configuración dinámica y articulada del campo de actores.

Eólica necesaria y urgente

Además de algunos administradores locales y regionales, este campo incluye también a Legambiente Calabria y a un representante de la filial italiana de la multinacional energética alemana RWE, activa con inversiones en Calabria. Uno de los elementos que recurre es el de la urgencia: los actores consideran la transición energética como necesaria para responder a los cambios climáticos, juzgados cada vez más peligrosos para sus territorios, y a ello conectan la exigencia de una implementación urgente y rápida de las infraestructuras tecnológicas eólicas.

En el caso aragonés, la urgencia adopta una declinación más marcadamente industrial que climática, como se desprende de la posición institucional de la directora del sector Energía y Minas del gobierno regional (Partido Popular), según la cual el objetivo prioritario es acercar el consumo a la generación mediante una nueva reindustrialización y digitalización del territorio.

Como Gobierno apostamos por la energía renovable como fuente de riqueza. Creemos que la energía es uno de los factores diferenciales para que Aragón siga generando desarrollo económico e industrial. Nuestra prioridad es que Aragón cuente con una industria capaz de consumir la energía que genera, es decir, acercar el consumo a la generación: es la mejor medida de sostenibilidad. Somos una comunidad tradicionalmente generadora que aspira a consumir, a través de una nueva reindustrialización y digitalización, la energía que produce, creando riqueza y empleo tanto con la generación como con el consumo (Entrevista, directora de Energía y Minas, Gobierno de Aragón).

Quien insta a la rápida realización de las instalaciones, en el contexto calabrés, es el representante de una de las mayores multinacionales del sector: la crisis climática representa, evidentemente, una posibilidad de inversión y beneficio. El interés económico se oculta discursivamente en una retórica pro-renovables orientada a la defensa del medio ambiente y del territorio frente a los riesgos de inundaciones, sequías y otros eventos extremos, y como posibilidad de desarrollo para territorios marginales como Calabria.

Las renovables representan hoy la única forma concreta de reducir la crisis climática. El clima y la Tierra deben ser respetados, y la única manera de hacerlo es producir energía de forma sostenible. Uno podría decidir no consumir energía, pero en 2026 esto no es realista (Entrevista, representante multinacional RWE).

La transición energética se interpreta como una oportunidad de desarrollo del territorio, generadora de beneficios y riqueza para los ciudadanos y los entes locales, además de un instrumento para defenderse de los eventos climáticos extremos. Un proceso que sería capaz de equilibrar también las desigualdades internas de los contextos regionales, es decir, entre áreas interiores y zonas urbanas y centrales dotadas de servicios. Emerge así la cuestión distributiva, señalada en la literatura.

La transición energética debe realizarse también en nuestra región, para que Calabria pueda emanciparse de las fuentes fósiles, reducir el coste de las facturas y contribuir así a limitar —si no eliminar— la pobreza energética que afecta a muchísimas familias, en un contexto que de por sí presenta ya situaciones de fragilidad económica (Entrevista, presidenta de Legambiente Calabria).

En el caso aragonés, el argumento de los beneficios adopta una forma particularmente clara en la voz de uno de los alcaldes entrevistados, presidente de la asociación intermunicipal Viento Alto, promotora del desarrollo eólico en el Maestrazgo, área afectada por el Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico de Europa en fase de realización.

Las áreas interiores necesitan recursos para sobrevivir; de lo contrario, se despueblan y mueren. La eólica es una de las pocas oportunidades concretas que tenemos. Y quien vive en la ciudad, quien viene aquí solo en verano, puede permitirse preocuparse solo por el paisaje; nosotros tenemos que pensar en mantener vivos estos pueblos todo el año (Entrevista, alcalde de un municipio aragonés).

El alcalde vincula explícitamente la eólica a la lucha contra el despoblamiento y la marginalidad de las áreas interiores, subrayando que la iniciativa del Clúster del Maestrazgo nació de los propios administradores locales, que habrían instado al Gobierno central y regional a invertir en el sector antes de que el proyecto fuera adjudicado a la empresa Forestalia, hoy objeto de una investigación judicial por presuntos episodios de corrupción. El alcalde sostiene además que el apoyo popular a la eólica queda demostrado por la reelección de los administradores favorables al Clúster, y atribuye la oposición principalmente a un partido regionalista y a asociaciones formadas, a su juicio, por personas que no residen de forma estable en el territorio.

Volviendo al tema de los beneficios, los alcaldes entrevistados abordan la cuestión de manera extremadamente explícita, conectándola con las dificultades económicas que viven los municipios italianos en términos de falta de recursos para invertir en el territorio. Las regalías (royalties) que las empresas energéticas abonan a las administraciones municipales, de hasta un máximo del 3% de los ingresos, se consideran importantes para garantizar servicios sociales, a lo que se añaden otras peticiones de los municipios a las empresas, como patrocinios para eventos culturales e intervenciones de mejora urbana.

El municipio que gobierna, sin los ingresos del parque eólico, habría entrado en quiebra económica. Solo habríamos podido garantizar el pago de los sueldos de los empleados y lo estrictamente necesario; con las solas transferencias estatales no habríamos llegado a ninguna parte. En términos económicos, disponer de 500.000 euros anuales de la empresa que gestiona el parque nos ha permitido mantener el equilibrio presupuestario y garantizar servicios gratuitos o a precios simbólicos para los ciudadanos, como el transporte escolar, el comedor y bonos adicionales durante la pandemia (Entrevista, alcalde de un municipio calabrés).

Este alcalde admite que la decisión de aceptar, a principios de los años 2000, la solicitud de una multinacional danesa para la construcción de un parque eólico se basa en una combinación de interés económico e interés por la defensa del medio ambiente. En el contexto de la zona del Golfo de Squillace, donde la mayoría de los municipios basan su economía en la recepción durante la temporada estival, el alcalde reivindica una solidez económica en parte desligada del mar.

El representante de la multinacional, en respuesta a las críticas y reivindicaciones de las oposiciones territoriales, sostiene el sólido vínculo con el territorio, conectado con los

beneficios producidos por la empresa en términos de satisfacción de las peticiones y necesidades de la administración municipal y de los ciudadanos, reivindicando el diálogo y la construcción de buenas relaciones con el territorio como filosofía de actuación.

Hoy, esas mismas personas que hace siete años nos protestaban porque estábamos realizando un parque eólico de RWE, nos paran y nos regalan quesos artesanales. ¿Cómo hemos afrontado la situación? Según nuestra filosofía empresarial: nunca nos ponemos en contra del territorio. Siempre nos ponemos a disposición, ayudando a las comunidades locales y tratando de aportar el máximo beneficio posible. [...] Muchas veces las administraciones atraviesan condiciones económicas difíciles y nos piden apoyo para restaurar una carretera, arreglar alguna infraestructura o patrocinar eventos ciudadanos (Entrevista, representante multinacional RWE).

Los administradores locales, aun destacando la importancia para los pequeños municipios de las áreas interiores de beneficiarse de los ingresos derivados de los parques eólicos, subrayan que el límite del 3% resulta de hecho residual respecto a los beneficios generados por las empresas. Denuncian además una marcada asimetría de poder y una condición de aislamiento decisonal, ya que las empresas tienden a menudo a interactuar directamente con los propietarios de los terrenos y con los niveles institucionales superiores, como la Región o el MASE. Se señala también el riesgo de una proliferación no regulada de las instalaciones, en ausencia de una adecuada planificación pública. La reivindicación común a todos los actores se refiere a la necesidad de una programación pública, y por tanto de una planificación energética. Se trata de un tema recurrente que surge de las entrevistas, interpretado por cada sujeto según su propia perspectiva. En particular, las empresas tienden a interpretarlo como un problema vinculado a la definición de sus propios planes de negocio y estrategias comerciales. El elemento que obstaculiza la rápida proliferación de las instalaciones eólicas se identifica en los lentos procesos burocráticos, en la dificultad de obtener respuestas de las Superintendencias de bienes culturales y en la debilidad e impreparación del sistema administrativo regional.

Para nosotros los tiempos son fundamentales, porque influyen directamente en los planes de negocio. No existe una normativa sectorial que proteja al inversor; si no, el inversor no invierte. Especialmente si se trata de multinacionales, porque ¿por qué debería invertir yo en Italia cuando tengo a Alemania, que me da plazos seguros, o cuando puedo ir a España? La misma situación se da a nivel regional: en Calabria, por ejemplo, el Departamento de Medio Ambiente cuenta solo con 4-5 personas, y todos los proyectos ambientales deben pasar por ellas. Por tanto, si no se refuerzan las estructuras administrativas, los procesos de autorización seguirán siendo siempre lentos, pero no por culpa de las asociaciones que se oponen ni de la política local (Entrevista, representante multinacional RWE).

Los directivos, en cada administración, representan la maquinaria operativa. Si no son competentes, la maquinaria no funciona. Me atrevo a decir que, en este momento, la administración regional calabresa parece dispuesta a apostar por la transición ecológica y las energías renovables. Sin embargo, a nivel directivo, en algunos sectores se evidencian carencias, y eso frena el desarrollo de las renovables (Entrevista, alcalde de un municipio calabrés).

Las organizaciones ambientalistas consideran que la ausencia de planificación no es una elección casual, sino más bien la señal de una voluntad política de dejar el sector en manos privadas. Esta situación se interpreta como un indicio de inercia por parte de la política regional, si no como una forma implícita de desregulación. Al mismo tiempo, la cuestión adquiere un papel central, ya que alimenta y da origen a las distintas formas de oposición local

en los territorios. En este contexto, la justicia procedimental reaparece como un nudo crucial, también a través de las voces y reivindicaciones de los actores implicados.

Es necesario construir una planificación adecuada y con la participación de los ciudadanos, precisamente para superar las oposiciones, naturalmente siempre respetando el paisaje y la biodiversidad, y subrayando que las instalaciones deben hacerse bien. [...] en Calabria no existe actualmente un plan energético regional, así como tampoco una localización de las áreas idóneas. Esto es claramente un problema, porque en Calabria es necesario planificar un desarrollo racional de las instalaciones (Entrevista, presidenta de Legambiente Calabria).

También en el caso aragonés, aunque se trata de un actor favorable a la eólica, el alcalde del Maestrazgo expresa una valoración crítica sobre la planificación energética nacional y regional, considerando que ni el Gobierno central ni el aragonés disponen de una estrategia clara, dejando de hecho a las empresas privadas un papel predominante en el diseño de las inversiones, una convergencia con las organizaciones ambientalistas calabresas, aunque partiendo de premisas opuestas sobre la eólica en sí. Una gobernanza democrática del proceso, la claridad de los beneficios para las comunidades y unas reglas fijadas ex ante para la localización se interpretan como los pilares para la aceleración de la transición energética

Eólica sí, pero no así

La coalición está compuesta por una pluralidad de actores, procedentes de distintos ámbitos y de ambos contextos territoriales regionales. En particular, forman parte de ella tres administradores locales —un consejero regional del PD y dos alcaldes de centroizquierda—, los portavoces de las coordinadoras de comités Controvento Calabria y Plataforma por la Defensa del Paisaje de Teruel, los representantes de Ecologistas en Acción Aragón, Legacoop Agroalimentare Calabria e Italia Nostra Calabria. Los actores entrevistados, que reunimos en la coalición eólica sí, pero no así, reconocen la necesidad de la transición energética para responder a los desafíos del cambio climático. Al mismo tiempo, la rápida proliferación de instalaciones eólicas a escala industrial (utility scale) se considera una amenaza para el medio ambiente y la seguridad del territorio, en particular por parte de los comités y coordinadoras constituidos específicamente en torno a esta disputa. Como primer elemento, cuestionan la urgencia y la real necesidad de la realización de un elevado número de instalaciones de gran tamaño. Las inversiones energéticas para cumplir los objetivos de descarbonización definidos por el Pacto Verde y los sucesivos paquetes legislativos se cuestionan y se consideran consecuencia de una ideología hegemónica, a la que habrían contribuido los movimientos por la justicia climática, que llevaría a imaginar tecnologías como la eólica y la solar como los únicos instrumentos alternativos posibles a las fuentes fósiles.

En el caso aragonés, la crítica se centra más bien en el impacto material y en la manipulación de los procedimientos de evaluación ambiental. El alcalde de La Zoma, exponente del partido Teruel Existe, reconstruye un caso específico en su municipio.

Impugué un proyecto de tres parques eólicos presentado en 2023, cuya línea de evacuación atravesaba un área afectada por un incendio en 2009, que destruyó 8.000 hectáreas de bosque. El proyecto ya había sido redactado trece años antes, y en todo ese tiempo la empresa no tuvo la decencia de modificar el trazado para respetar las pocas centenas de hectáreas que quedaron indemnes del fuego. Recurrí ante el INAGA, ante el departamento de Industria, ante el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Nadie me respondió. Me siento completamente anulado

como alcalde: existe una autonomía municipal, pero ningún organismo la ha tenido en cuenta (Entrevista, alcalde de un municipio aragonés).

Otras cuestiones planteadas son los peligros que representan los parques eólicos para la fauna voladora y, sobre todo, para el paisaje, vinculados al riesgo de comprometer la capacidad de atracción turística del territorio.

Hace falta una evaluación coste-beneficio: tenemos uno de los paisajes más bellos del mundo y quieren colocar aerogeneradores de 330 metros de altura. Yo tengo que tener derecho a decidir sobre esto. ¿Alguien se atrevería a instalar aerogeneradores en las islas Baleares o en Fiyi? Quien propone estos proyectos no conoce nuestro territorio. Pensemos en las playas de Giovino: podríamos generar un turismo único como el de Madagascar. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Porque una empresa de Noruega ha decidido colocar decenas de aerogeneradores en el mar? Es realmente una violencia contra el territorio (Entrevista, concejal de un municipio calabrés).

La belleza de las costas y de las áreas rurales calabresas y aragonesas, donde se concentran las instalaciones, es uno de los elementos que los actores plantean con frecuencia. En estos territorios periféricos, la realización de los parques eólicos como infraestructuras representa una amenaza para lo que se considera el mayor recurso de estos territorios y, por tanto, para su propia identidad. Surgen tres interrogantes en la base de estas oposiciones heterogéneas y, en ocasiones, contradictorias, respecto a la realización de las instalaciones: ¿dónde?, es decir, su localización; ¿cómo?, es decir, los procedimientos adoptados; y ¿para quién?, es decir, quién soporta los costes y quién se beneficia de las ventajas. Según los actores que integran este campo, el proceso de localización de las instalaciones no es casual y no tiene que ver únicamente con la presencia de la fuente primaria, es decir, en este caso, el viento. Elemento confirmado también por la literatura (Alpino et al. 2025). Las decisiones de localización agudizarían las desigualdades: en Calabria emerge la fractura entre las regiones del sur y del norte de Italia, con el Mezzogiorno como fuente de energía para los centros industriales, mientras que en Aragón la fractura recorre las áreas rurales despobladas, corazón del fenómeno de la España vacía, y la capital, Zaragoza.

Nosotros en Calabria ya hemos dado mucho sin obtener nada a cambio. En Milán, por ejemplo, producen 100 unidades de energía y consumen 250, así que esas 150 restantes tienen que traerlas de fuera. Nosotros, en cambio, producimos 100 y consumimos solo 45, exportando el resto, pero pagamos el mismo coste de transporte que los milaneses (Entrevista, concejal calabrés).

Estas oposiciones tienen como trasfondo el desarrollo desigual del país, la consideración de los territorios meridionales como zonas de sacrificio. Dar sin recibir, empobrecerse para enriquecer a otros. Estar al servicio de otros. En Aragón, este argumento adquiere una forma aún más radical en la voz del portavoz de Aragón Existe, que describe la región como un verdadero "territorio de sacrificio".

Es significativo que en una región con una enorme necesidad energética como Madrid no haya ni un solo aerogenerador. Lo mismo ocurre con Cataluña. Las renovables en Aragón no están pensadas para abastecer de energía al territorio, sino para exportarla hacia las comunidades que no instalan instalaciones. Esto es un auténtico saqueo de un recurso natural —el sol, el viento— no en beneficio de quien lo produce, sino para favorecer a las empresas y a los lugares donde se concentran los beneficios y el empleo (Entrevista, portavoz de Aragón Existe).

El portavoz de la Plataforma por la Defensa del Paisaje de Teruel añade un dato empírico en apoyo de esta lectura:

Aragón ha desarrollado una cantidad de potencia energética tan elevada que en un momento dado ni siquiera se sabía cómo utilizarla [...] Un municipio como Fuendetodos, conocido por ser el lugar de nacimiento de Francisco Goya, a pesar de la alta concentración de turbinas eólicas, no ha registrado los beneficios económicos esperados, y la población sigue disminuyendo. Hemos realizado estudios sobre esto: se sostenía que los parques eólicos favorecerían el crecimiento demográfico, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística demuestran lo contrario (Entrevista, portavoz de la Plataforma por la Defensa del Paisaje de Teruel).

El tema de la localización desigual de las instalaciones está directamente conectado, como se observa, con el tema de los beneficios: ¿transición para quién? Los actores subrayan la ausencia de beneficios tangibles en el territorio, sobre todo en términos de coste de la energía y mejora de los servicios. Si para algunos alcaldes de la coalición eólica urgente los cánones de las empresas se consideran fundamentales, para los comités y algunos alcaldes se consideran insuficientes y reduccionistas si se comparan con los beneficios de las propias empresas. Un alcalde aragonés expresa este escepticismo de forma aún más radical:

¿De qué me sirve recibir un millón de euros en un municipio de 27 personas? ¿Qué hago, traigo aquí al mejor grupo de rock de Europa para la fiesta del pueblo? La mayoría de las carencias que tenemos en las zonas rurales —no tener médicos, no tener un puesto de la guardia civil, tener muy poco transporte público, una financiación estatal bajísima— no son competencias directas de los municipios. Todo esto no podemos resolverlo nosotros (Entrevista, alcalde de un municipio aragonés).

El tercer interrogante es: ¿cómo? La cuestión procedimental, como se ha señalado también en la introducción teórica, es muy relevante. Administradores locales, comités y también organizaciones ambientalistas denuncian, de hecho, la falta de participación de las comunidades en las decisiones relativas a los proyectos eólicos que se pretenden realizar en el territorio. Representa una de las principales razones de las oposiciones.

Nosotros queremos ser parte de la discusión, queremos ser reconocidos como sujeto político y estamos dispuestos a encontrar formas de mediación, conscientes de que no todo podrá ser como nosotros queremos (Entrevista, portavoz de Controvento Calabria).

Como subraya este activista calabrés, lo que faltaría es el reconocimiento político de la coordinadora de comités que representa, incluso antes que la atención hacia sus reivindicaciones. En ambos casos, no se trata de nodos de organizaciones ambientalistas históricas, sino de redes informales de pequeños comités surgidos en el territorio precisamente en torno a la disputa eólica. La escasa participación es denunciada también por los alcaldes, pero se atribuye al limitado poder decisorio que se les reconoce respecto a los niveles institucionales superiores y al peso económico de las empresas. Los procedimientos de autorización de las instalaciones, en efecto, tanto en Italia como en España, son competencia de las regiones hasta los 50 MW, mientras que las instalaciones de potencia superior recaen bajo la responsabilidad del Gobierno.

En relación con la definición de la denominada ley de Áreas Idóneas, la Región de Calabria debe dialogar con los municipios, con los administradores; no puede ser redactada por burócratas en despachos cerrados (Entrevista, concejal calabrés).

En el caso calabrés, los alcaldes de numerosos municipios de la provincia de Catanzaro, pertenecientes a diferentes formaciones políticas, se han unido en una coalición, mediante reuniones repetidas y comunicados de prensa, para oponerse al proyecto del parque eólico marino Enotria. El objetivo era reforzar su propia voz y sus reivindicaciones frente a la Región de Calabria y al MASE.

Las peticiones planteadas por una parte de los actores de eólica sí, pero no así se refieren, ante todo, a una transición energética a pequeña escala, que concentre las instalaciones en áreas ya comprometidas o degradadas, además de la promoción de comunidades energéticas y de formas de autoconsumo. El portavoz de Aragón Existe articula estas peticiones en cuatro puntos: una planificación energética preventiva que establezca las necesidades reales; la prioridad al autoconsumo mediante incentivos adecuados; la identificación clara de las áreas excluidas de los grandes proyectos; y el fin del recurso a la expropiación forzosa de terrenos privados para la realización de infraestructuras llevadas a cabo por empresas privadas y justificadas como de utilidad pública.

El camino más sano no es solo producir energía de forma verde: el objetivo de la transición es reducir la producción de energía en conjunto. Primero debemos encontrar formas de reducir los consumos, y solo entonces pensar en producir energía verde. Si nos limitamos a producir energía verde para sustituir la contaminante, no hemos resuelto el problema; dentro de diez años, los aerogeneradores en los mares de todo el mundo no serán suficientes (Entrevista, concejal calabrés).

Al mismo tiempo, algunos actores expresan posiciones favorables a las inversiones en agrovoltaica, considerada una tecnología adecuada tanto para proteger los cultivos de los eventos climáticos extremos, como sequías y precipitaciones intensas, como para generar ingresos en territorios cada vez menos productivos. Otros, en cambio, no descartan de forma absoluta la realización de parques eólicos, siempre que estén adecuadamente planificados. Precisamente el tema de la planificación surge como una reivindicación unitaria dentro de la coalición. La planificación pública se considera una prioridad urgente y decisiva, ya que puede definir los objetivos energéticos a nivel territorial e identificar las áreas idóneas y no idóneas para el desarrollo de las instalaciones. Por el contrario, la incertidumbre se percibe como una fuente de inseguridad y de amenaza. El vínculo entre desarrollo eólico y centros de datos, central en Aragón, se lee en esta coalición en claro contraste con la posición institucional de la directora de Energía y Minas del gobierno regional, que en la coalición eólica necesaria y urgente identificaba en la atracción de los centros de datos la misma prioridad estratégica que el desarrollo eólico. El representante de Ecologistas en Acción invierte esa lectura, proponiendo su origen como consecuencia y no como estrategia:

Cuando los proyectos de exportación de energía hacia Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana empezaron a encontrar obstáculos, porque esas comunidades no autorizaban las líneas de alta tensión necesarias, se planteó un problema: ¿qué hacer con toda esa energía ya autorizada, si no podía exportarse? Fue entonces cuando se buscó una solución alternativa: favorecer la instalación de grandes centros de datos capaces de absorber localmente la energía que ya no podía transportarse a otro lugar (Entrevista, Ecologistas en Acción Aragón).

Donde la directora regional habla de "acercar el consumo a la generación" como "la mejor medida de sostenibilidad", la portavoz de la Plataforma por la Defensa del Paisaje de Teruel lee el mismo fenómeno como una traición al objetivo original:

El objetivo inicial de las renovables era la descarbonización de la economía. Hoy una parte creciente de la energía se destina a los centros de datos: más que reducir los consumos y combatir el cambio climático, se está avanzando hacia su aumento (Entrevista, portavoz de la Plataforma por la Defensa del Paisaje de Teruel).

El portavoz de Aragón Existe traslada la crítica también a la transparencia:

Los centros de datos requieren enormes cantidades de energía y agua, pero estos datos no se hacen públicos, a pesar de que la normativa europea prevé su registro. No se puede evaluar el impacto ecológico real de estas infraestructuras si no se conocen sus consumos (Entrevista, portavoz de Aragón Existe).

Significativamente, también desde el gobierno central llega una posición crítica sobre este tema específico, aunque proceda de un partido, el PSOE, que a través del gobierno de Lambán había promovido y en parte desregulado el boom eólico que hoy hace posible la instalación de los centros de datos:

Los centros de datos aparecen hoy como auténticas cajas negras, que no generan ni innovación ni empleo de calidad a nivel local, configurándose más bien como una forma de economía extractiva (Entrevista, jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Aragón).

La petición de fondo sigue siendo la misma de los comités calabreses y aragoneses ya citados: una dirección pública capaz de establecer de antemano el destino y los límites del desarrollo energético, en lugar de perseguir sus consecuencias, independientemente de su conexión o no con los centros de datos. El tema de la planificación, como subraya el alcalde de La Zoma, está estrechamente vinculado también a la cuestión de la propiedad de las instalaciones. Las empresas, en efecto, se organizan en función del marco normativo vigente, que de hecho les concede un amplio margen decisorio en la localización de las instalaciones y en la distribución de los beneficios. Esta configuración se denuncia como una forma de injusticia, frente a la cual la intervención pública se interpreta como un instrumento de reequilibrio, capaz de garantizar una mayor equidad en el proceso de transición energética.

8. Conclusiones preliminares

Esta contribución, todavía preliminar, ha examinado los conflictos surgidos en torno a la implementación de las políticas de transición energética y, en particular, a la realización de instalaciones eólicas a escala industrial (utility scale) en dos contextos territoriales específicos: Calabria y Aragón. Se trata de territorios donde las intervenciones se concentran en áreas circunscritas y marginales respecto a los centros urbanos, a menudo caracterizadas por el despoblamiento y por un menor coste económico de los terrenos. Estos lugares están atravesados por profundos conflictos entre actores diferentes en torno a la realización de instalaciones eólicas. Nuestro análisis ha identificado dos coaliciones principales, sobre la base de los temas surgidos de las entrevistas realizadas: eólica necesaria y urgente y eólica sí, pero no así. Ambas coaliciones están compuestas por actores procedentes de ámbitos distintos, que comparten una visión general pero la interpretan según sus propios intereses, valores y especificidades. No faltan, en algunas cuestiones, visiones incluso opuestas entre actores pertenecientes al mismo campo.

Junto al plano de los discursos, una contradicción análoga emerge a nivel de gobernanza regional. Ambos gobiernos actualmente en el poder, de centroderecha, promueven de hecho estrategias de desarrollo que entran en conflicto con el objetivo declarado de descarbonización y reducción de emisiones: en Calabria, a través de la propuesta de la región como hub

energético centrado en la regasificación del gas natural, un combustible fósil; en Aragón, a través de las inversiones en centros de datos, infraestructuras de alta intensidad energética e hídrica. En ambos casos, la misma gobernanza regional que promueve la transición eólica sostiene paralelamente modelos de desarrollo que contradicen, al menos en parte, su razón de ser original, una tensión que opera con independencia de las posiciones expresadas por los actores individuales entrevistados.

Un primer elemento que emerge a nivel discursivo es que la mayoría de los actores entrevistados reconoce la crisis climática, su alcance y sus riesgos, vinculándolos a los eventos extremos que golpean los territorios, como sequías, olas de calor, lluvias intensas e inundaciones. El negacionismo se limita a un único caso: el diputado de VOX en el parlamento autonómico, que, en la entrevista, sostuvo explícitamente que «en nuestra opinión, han sido algunas élites las que han forzado esta transformación mediante leyes, reglamentos y normativas que han penalizado tecnologías eficaces, capaces de garantizar energía abundante y tarifas accesibles. Y todo esto porque, de hecho, desde Bruselas llegó una línea política que todos han tenido que seguir. El clima sigue cambiando como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia». Esta posición, aislada en cuanto al reconocimiento de la crisis climática, se sitúa sin embargo en una posición compleja respecto a las dos coaliciones identificadas: VOX sostiene, en efecto, la necesidad de la transición energética por ser favorable a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas inversiones industriales, aunque separa este apoyo del reconocimiento del cambio climático, interpretado como fruto de una ideología impuesta por la Comisión Europea. Al mismo tiempo, critica sus modalidades de aplicación, denunciando el cierre de las centrales nucleares, la falta de escucha de las comunidades en los territorios afectados por las instalaciones eólicas y el recurso a las expropiaciones, retomando así algunas de las reivindicaciones propias de la segunda coalición, aunque partiendo de premisas opuestas en cuanto al reconocimiento de la crisis climática.

Del mismo modo, los demás actores identifican en la explotación de los combustibles fósiles, recursos concentrados y finitos, la causa principal del fenómeno, y reconocen en las tecnologías renovables, desde la fotovoltaica hasta la agrovoltáica, desde las comunidades energéticas hasta la eólica, la solución. Para la primera coalición, el riesgo representado por la crisis climática, junto con los objetivos fijados a nivel internacional y con las evidencias científicas de organismos internacionales como el IPCC, constituyen la base para reivindicar una implementación rápida y urgente de los proyectos eólicos a escala industrial. Las demandas de ambas coaliciones plantean cuestiones de justicia procedimental y distributiva. Para la primera, las peticiones de gobernanza democrática y de participación ciudadana se orientan sobre todo a favorecer la aceptabilidad social de las obras, más que a poner realmente en discusión su realización. Por el contrario, la segunda coalición lamenta una falta de reconocimiento político y una escasa capacidad de escucha por parte de las instituciones, atribuyéndolas a la naturaleza de sus propias críticas y propuestas. Entre estos actores emerge un profundo sentido de injusticia, arraigado en la historia del desarrollo de los territorios, como la provincia de Teruel en Aragón y diversas áreas despobladas de Calabria. Este sentimiento se manifiesta, por ejemplo, en la denuncia de que la energía producida localmente se utilice para sostener el consumo y el desarrollo de otras regiones o de otras áreas de la misma región. Algunos actores utilizan el término "colonialismo" para describir esta relación desigual entre la periferia que produce bienes, soportando sus externalidades negativas, y el centro que obtiene los beneficios. La cuestión de los beneficios sigue siendo central. La dimensión distributiva es esencial. Los actores más favorables a la localización de la eólica, en particular los alcaldes, subrayan como principal motivación de su apoyo los recursos económicos que las instalaciones pueden aportar al territorio. Por el contrario, los actores de la segunda coalición denuncian su ausencia y el consiguiente sentimiento de injusticia. El tema de la planificación, como subraya el alcalde

aragonés de La Zoma entrevistado, está estrechamente vinculado también a la cuestión de la propiedad de las instalaciones. Las empresas, en efecto, se organizan en función del marco normativo vigente, que de hecho les concede un amplio margen decisorio en la localización de las infraestructuras y en la distribución de los beneficios. Esta configuración se denuncia como una forma de desigualdad, frente a la cual la intervención pública se interpreta como un instrumento capaz de garantizar mayor equidad. El plano discursivo y el de la gobernanza, aunque distintos, resultan por tanto convergentes: si los actores movilizan el tema de la funcionalización de la eólica —a los centros de datos en Aragón, a la lógica de hub en Calabria— como argumento de crítica o de legitimación según la coalición de pertenencia, la gobernanza regional muestra cómo esa misma funcionalización ya está inscrita, con independencia de los discursos de los actores, en las decisiones de planificación y en los actos administrativos analizados.

A pesar de la variabilidad entre los dos contextos regionales a nivel económico, social y político, emergen así configuraciones recurrentes tanto en los discursos como en las prácticas de gobierno, que sugieren la existencia de dinámicas estructurales capaces de atravesar contextos locales diferentes, que deberán profundizarse y verificarse ulteriormente en el desarrollo de la investigación.

Bibliografia

- Aitken, M. (2010). Why we still don't understand the social aspects of wind power: A critique of key assumptions within the literature. *Energy policy*, 38(4), 1834-1841.
- Arrighi, G., and Piselli, F. (1987). Capitalist development in hostile environments: feuds, class struggles, and migrations in a peripheral region of southern Italy. *Review (Fernand Braudel Center)*, 10(4), 649-751.
- Bagnasco, A. (1977). *Tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano*. Bologna: Il Mulino
- Barry, J., Ellis, G., Robinson, C. (2008). Cool rationalities and hot air: a rhetorical approach to understanding debates on renewable energy. *Global environmental politics*, 8(2), 67-98.
- Becattini, G., Sforzi, F. (2000). *Il distretto industriale. Un nuovo modo di interpretare il cambiamento economico*.
- Campolongo, F., Citroni, G., Tarditi, V. (2023), What, when, how? The framing of energy transition by Italian parties, in «*Italian Political Science*», n. 3, pp. 211-232.
- Campolongo, F., Citroni, G., Tarditi, V. (2023), *Transizione Energetica. Attori, conflitti, democrazia*. Mondadori Università.
- Carley, S., Konisky, D. M. (2020). The justice and equity implications of the clean energy transition. *Nature Energy*, 5(8), 569-577.
- Carrosio, G. (2019). *I margini al centro: L'Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione*. Donzelli editore.
- Donella, M., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens III, W. W. (1972). *The limits to growth*. New York: Universe.
- Citroni G. (2024), *Strumenti innovativi per le politiche di sostenibilità*, Milano, Mondadori Università.
- Ellis, G., Barry, J., e Robinson, C. (2007). Many ways to say 'no', different ways to say 'yes': applying Q-methodology to understand public acceptance of wind farm proposals. *Journal of environmental planning and management*, 50(4), 517-551.
- Frantál, B., Frolova, M., Liñán-Chacón, J. (2023). Conceptualizing the patterns of land use conflicts in wind energy development: Towards a typology and implications for practice. *Energy Research & Social Science*, 95, 102907.
- Fraune, C., Knodt, M. (2018). Sustainable energy transformations in an age of populism, post-truth politics, and local resistance. *Energy Research & Social Science*, 43, 1-7.
- Frazzetta, F., Imperatore, P. (2022). *Estrattivismo, colonialismo e land-scape grabbing nella produzione energetica: uno sguardo dalla Sicilia*.
- Geels, F. W., Verhees, B. (2011). Cultural legitimacy and framing struggles in innovation journeys: A cultural-performative perspective and a case study of Dutch nuclear energy (1945–1986). *Technological Forecasting and Social Change*, 78(6), 910–930.
- Gill, S. (1998) European governance and new constitutionalism: Economic and Monetary Union and alternatives to disciplinary Neoliberalism in Europe, *New Political Economy*, 3(1): 5–6. doi: 10.1080/13563469808406330
- Holman, O. (2004) Asymmetrical regulation and multidimensional governance in the European Union, *Review of International Political Economy*, 11(4): 714–35. doi: 10.1080/0969229042000279775
- Hornborg, A. (2019). *Nature, society, and justice in the anthropocene: Unraveling the money-energy-technology complex*. Cambridge University Press.
- Imperatore, P., Leonardi, E. (2023), *L'era della giustizia climatica*, Napoli, Orthotes.

- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee & J. Romero (eds.)]. IPCC. Knodt, M., & Kemmerzell, J. (Eds.). (2022). Handbook of energy governance in Europe. Cham, Switzerland: Springer.
- Lipari, S. (2021). Capitalismo “verde” nelle regioni marginali d’Europa: le transizioni rinnovabili tra rendita e sviluppo diseguale. *Materialismo Storico Rivista di filosofia, storia e scienze umane*, 11(2), 256-293.
- Pellizzoni, L., Leonardi, E., and Asara, V. (Eds.). (2022). Handbook of critical environmental politics. Edward Elgar Publishing.
- Prontera A. (2021), The dismantling of renewable energy policy in Italy, in «Environmental Politics», n. 7, pp. 1196-1216. — (2023), Winter is coming: Russian gas, Italy and the post-war European politics of energy security, in «West European Politics», n. pp. 1-26.
- Prontera, A. (2023). Winter is coming: Russian gas, Italy and the post-war European politics of energy security. *West European Politics*, 46(1), 1-26.
- Sánchez-Contreras C., J., Matarán Ruiz, A., Campos-Celador, A., & Fjellheim, E. M. (2023). Energy colonialism: A category to analyse the corporate energy transition in the Global South and North. *Land*, 12(6), 1241.
- Scotti I (2022), La transizione energetica nei territori: il caso dell’eolico in Basilicata, *Meridiana*, 2022, No. 105, pp. 139-160
- Siddi, M. (2023). Europe’s Energy Dilemma: War and the Green Transition. *Current History*, 122(841), 83-88.
- Temper, L., Avila, S., Del Bene, D., Gobby, J., Kosoy, N., Le Billon, P. and Walter, M. (2020). Movements shaping climate futures: A systematic mapping of protests against fossil fuel and low-carbon energy projects. *Environmental Research Letters*, 15(12), 123004.
- Trigilia, C. (2005). Sviluppo locale: un progetto per l’Italia, Roma-Bari, Laterza.
- Trimmel, K. E., Kriechbaum, M., Lazou, R., & Brudermann, T. (2024). Between distributive and procedural justice claims: Reframing patterns of discursive resistance against climate action. *Energy Research & Social Science*, 109, 103424
- Turner, G. M. (2008). A comparison of The Limits to Growth with 30 years of reality. *Global environmental change*, 18(3), 397-411.
- Van Vossle, J. (2016). Framing PIGS: patterns of racism and neocolonialism in the Euro crisis. *Patterns of Prejudice*, 50(1), 1-20.
- Sovacool, B. K. (2013). Energy policy: Politics, values, and power. In: Sovacool, B. K. (Ed.), *The Routledge Handbook of Energy Policy*.